



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A.
Litisconsorte necesario: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Radicado: 05001 31 05 018 2018 00321 01
Sentencia: S-144

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de octubre de 2022, puesto que la misma no fue recurrida por las partes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ALBA LUCIA LÓPEZ MIRANDA demandó a COLPENSIONES y a PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la ineficacia del traslado en pensiones por ineficacia del acto jurídico, del RPMPD administrado por

el ISS, hacia PROTECCIÓN S.A. por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos, la devolución a Colpensiones de todos los valore, así como la reactivación de la afiliación a esa entidad. Pretende además se le ordene a COLPENSIONES, que reconozca y pague su pensión de vejez puesto que cumple con todos los requisitos legales, y a su vez se le condene al pago de los intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993, por último, que se condene a las entidades demandadas al pago de las costas procesales.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que labora en Telemedellín, en carrera administrativa, ejerciendo el cargo de contadora desde el 01 de septiembre de 1997; que se afilió a COLPENSIONES –al régimen de prima media- desde el 04 de agosto de 1981 hasta el 15 de septiembre de 1997, llegando a cotizar a dicho régimen un total de 232 semanas; posteriormente se trasladó al Régimen de Ahorro Individual –RAIS- a la AFP PROTECCIÓN S.A., agrega que la AFP privada no le brindó suficiente información al momento de la afiliación, sobre las características del RAIS, el capital que debía acumular para obtener una pensión, el valor inferior de la mesada pensional en contraposición con la que se llegase a obtener en el RPMPD.

Manifiesta que solicitó a PROTECCIÓN S.A. una proyección de su mesada pensional, la cual arrojó para ese momento el equivalente al salario mínimo, en consideración a que en su cuenta de ahorro individual solo tenía un capital ahorrado por la suma de \$207.200.094, no obstante manifiesta que cotiza con un ingreso base de cotización con un asignación básica mensual de \$5.012.843; que el 01 de octubre de 2015 la AFP PROTECCIÓN S.A. rechazó su solicitud de traslado al RPMPD. Igualmente presentó solicitud de traslado a Colpensiones

misma que fue negada, pues le faltaban menos de 10 años para cumplir los términos para pensionarse.

Por último, dice que actualmente cuenta con 1300 semanas de cotización y 57 años de edad razón por la cual solicitó el reconocimiento y pago de una pensión a Colpensiones, petición que fue rechazada mediante el oficio número BZ2018-5027633-131-7764, los argumentos para el rechazo fue la afiliación al RAIS.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES dice que acepta la fecha de la afiliación al RPMPD de la demandante, su traslado al RAIS y la totalidad de semanas de cotización, así mismo acepta la solicitud de traslado al RPMPD y su respuesta negativa del 25 de septiembre de 2015. Sobre los demás hechos indica que no le constan por referirse a hechos ajenos a su conocimiento. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer de fundamentación legal, fáctico y probatorio. Como excepciones propuso, improcedencia de declarar ineficaz o nula la afiliación al sistema de ahorro individual con solidaridad, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas.

Por su parte PROTECCIÓN S.A. al contestar, acepta la afiliación a esa AFP realizada por la demandante y la respuesta al derecho de petición en el que la actora solicita su traslado de régimen a COLPENSIONES, aclara además, que a la accionante se le informó con claridad sobre las características propias del RAIS, las implicaciones de afiliarse a ese régimen y sus diferencias con el RPMPD, dejando claro que uno y otro son excluyentes y que cada uno conlleva sus propias condiciones, cumpliendo así con su responsabilidad profesional, por lo que correspondió a la afiliada decidir con toda la información recibida a cual régimen deseaba pertenecer, eligiendo finalmente a esa administradora e implantando su firma en el formulario de afiliación, suministrando así

su consentimiento, en señal de conocimiento y aceptación. Se opuso a las pretensiones toda vez que la afiliación al RAIS es un acto existente, válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, innominada o genérica.

Finalmente, el apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO al contestar acepta la afiliación de la demandante ante COLPENSIONES, sobre los demás hechos indica que no le constan por tratarse de situaciones dirigidas a otras entidades. Se opuso a las pretensiones de la demanda e indica, que si bien es cierto la demandante se encuentra vinculada al RAIS, esa oficina responde únicamente por la liquidación, emisión, expedición y redención, pago o anulación de bonos pensionales o cupones de bonos pensionales a cargo de la Nación, procedimientos que se efectúan con base en las solicitudes que al respecto realicen las Administradoras del Sistema General de Pensiones, en consecuencia, la señora ALBA LUCÍA tiene derecho a que se emita en nombre suyo un Bono pensional tipo A modalidad 2 por haberse trasladado al RAIS con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y tener una historia laboral de cotización al ISS o a cajas públicas superior a 150 semanas.

Agrega que la fecha de redención normal del Bono Pensional tuvo lugar el 08 de junio de 2019, fecha en la cual la demandante alcanzó los 60 años de edad de que trata el literal a) del artículo 20 del Decreto 1748 de 1995, hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones. Dice que PROTECCIÓN S.A. solicitó la emisión del bono pensional, no obstante cuando iba a realizar el pago procedió a anularlo mediante Resolución N°19737 del 21 de mayo de 2019 por cuanto debía reliquidararlo con la historia laboral completa. Como excepciones propuso buena fe, excepción genérica.

En la etapa de saneamiento el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín **EXCLUYE** de las pretensiones de la demanda se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, así como los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, decisión que fue aceptada por las partes del proceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 11 de octubre de 2022, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

“PRIMERO: Se **DECLARA LA INEFICACIA DEL TRASLADO EFECTUADO** por la señora **ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, como se dijo en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se **ORDENA** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.**, efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación, como cotizaciones, con los rendimientos que se hubieren causado, las cuotas de administraciones debidamente indexadas, primas de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima con cargos a sus propios recursos y por el tiempo que la demandante realizó aportes en el Régimen de Ahorro individual con solidaridad a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, según se explicó en las consideraciones de la presente providencia.

En igual sentido, se ordenará además a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.**, al traslado a **COLPENSIONES** de las sumas adicionales de la aseguradora y cuotas de administración, con base en los mismos argumentos reseñados en precedencia.

TERCERO: SE ORDENA a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, reactivar la afiliación de la parte actora, recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones, según se dijo en la parte motiva.

CUARTO:SE ORDENA a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.** la **ANULACIÓN Y/O REINTEGRO** del Bono Pensional Tipo “A” al

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, que fue emitido y pagado en favor de la señora **ALBA LUCIA LOPEZ MIRANDA**, debidamente indexado a la fecha de pago, toda vez que las cosas vuelven a su estado inicial al declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional.

QUINTO: SE DECLARA IMPROBADA la excepción de prescripción y las demás quedaron resueltas dentro de la providencia en calidad de meras oposiciones.

SEXTO: SE CONDENA EN COSTAS a cargo de **PROTECCIÓN** al ser vencida en juicio de conformidad con el art. 365 del CGP. Las agencias en derecho a ser incluidas en la liquidación de costas quedarán fijadas en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Sin costas para Colpensiones ni del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, dado que no participaron en el traslado inicial de régimen pensional de la demandante y por tal razón su comparecencia a este proceso se dio únicamente para materializar las consecuencias del retorno de los demandantes al RPM, esto es, la reactivación de la afiliación al RPM."

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Se advierte que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el respectivo traslado las partes guardaron silencio y no presentaron alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES:

Se procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, toda vez que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la Sra. ALBA LUCÍA LÓPEZ MIRANDA nació el 8 de junio de 1959 ; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional régimen de prima media en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- y realizó cotizaciones allí desde el 04 de agosto de 1981; y *iii)* el 15 de septiembre de 1997 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A., efectivo a partir del 01 de octubre de ese mismo año, entidad en la que se encuentra actualmente afiliada.

Ineficacia del traslado.

La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se

requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;

- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, se trasladó al RAIS en el año 1997 cuando laboraba al servicio de TELEMEDELLÍN donde llegaron unos asesores de la AFP PROTECCIÓN S.A. que le manifestaron a todo el personal de la empresa y le indicaron que era un fondo que les ofrecía mejores beneficios en términos pensionales; agrega la actora en su declaración que todas las asesorías

fueron grupales y que la única asesoría individual fue al momento de firmar el formulario de vinculación a la AFP; que no recuerda que haya realizado preguntas de las características de la pensión, tampoco que se le haya explicado algo al respecto; que para el momento en que tuvo conocimiento de que el ISS pasó a ser Colpensiones ya se encontraba afiliada a PROTECCIÓN S.A.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, además es

procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Ahora bien, tampoco resulta procedente en este caso la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la

ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamados a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado no pueden estar sometidas a la prescripción.

En lo que tiene que ver con la orden de la a quo a PROTECCIÓN S.A. de reintegrar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO el bono pensional que pudiera haberse pagado a favor de la actora, tal decisión es acertada por cuanto al declararse ineficaz la afiliación de la demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución a ese Ministerio.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el día 11 de octubre de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c87c46263d13d4fec95ba10f46ad232df6596801b86faedfbc9f0b538ec8d4e2**

Documento generado en 26/05/2023 01:23:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>